



*Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz*  
*Fiscal General de la República*

DFG-O-276/2018  
San Salvador, 24 de octubre de 2018.

Licenciado Carlos Adolfo Ortega  
Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública

Sea la presente portadora de los mejores deseos de éxitos en las funciones que desarrolla al frente del Instituto de Acceso a la Información Pública.

En respuesta a su oficio con referencia IAIP. A1-01.152-2018 de fecha 09 de agosto de 2018, recibido en mi despacho en fecha 26 de septiembre de 2018, en virtud de procedimiento bajo el número de referencia NUE 176-A-2016, en el cual se manifiesta que esta Fiscalía realizó requerimiento judicial y producto de este, se llegó a una condena en contra de un motorista de CAPRES, siendo la información solicitada por el apelante en relación a dicho trámite ante el IAIP, la siguiente: "1) *Informe sobre la misión o diligencias oficiales en las que se utilizó el vehículo oficial placas P-19-966 durante el periodo comprendido del 29 de abril al 2 de mayo del presente año.* 2) *Informe sobre el departamento o área institucional, nombre del funcionario o persona responsable a la que está asignado el vehículo oficial P-19-966;* y 3) *Copia de la bitácora del vehículo oficial placas P19-966 durante el correspondientes (sic) a los días comprendidos desde el 29 de abril al 2 de mayo del presente año*", por lo que me solicita informe sobre la finalización de las diligencias de investigación que se desarrollan, sobre los hechos que se relacionan con la información antes detallada, de lo cual le expreso lo siguiente:

En atención a lo anterior y de los hechos relacionados en su oficio, le expreso que en cuanto a diligencias de investigación no es posible proporcionar información, porque la existencia de expedientes de investigación es reservada para todo aquel que no sea interviniente, conforme a la estipulado en el artículo 76 del Código Procesal Penal (en adelante CPP). En ese sentido, la Fiscalía General de la República debe velar por el cumplimiento de dicha disposición, la cual expresamente establece que "*Sin perjuicio de la publicidad de los actos del proceso penal, las diligencias de investigación serán reservadas y sólo las partes tendrán*

*acceso a ellas, o las personas que lo soliciten y estén facultada para intervenir en el proceso”.*

Asimismo, la Ley de Acceso a la Información Pública (en adelante LAIP) establece en el literal “f” del artículo 19, que es información reservada *“La que causare un serio perjuicio en la prevención, investigación o persecución de actos ilícitos, en la administración de justicia o en la verificación del cumplimiento de las leyes.”* Esto guarda concordancia con la reserva de la información regulada en el ya mencionado artículo 76 del CPP antes relacionado. Sobre este punto es pertinente manifestar que la LAIP ha derogado expresamente a través del artículo 110, todas aquellas disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que la contraríen, sin embargo, dentro del mismo artículo establece en el literal “f” que no se derogan *“Las normas contenidas en leyes procesales, en cuanto al acceso a expedientes durante el período de su tramitación...”*, por lo tanto, la disposición establecida en el artículo 76 del CPP continúa vigente y consiguientemente debe ser objeto de estricto cumplimiento por parte de esta Fiscalía y de cualquier Institución.

No obstante lo anterior, en virtud que los expedientes aperturados por los hechos que relaciona en su oficio efectivamente han sido judicializados, por este medio le comunico que las referencias judiciales relacionadas a dicho caso son las siguientes: **1. Causa 224-2016-1EEM** del Juzgado de Paz de La Libertad y **2. Referencia -56-3-2017** del Juzgado de Sentencia de Santa Tecla.

En consecuencia y de conformidad con lo antes expuesto, sobre los hechos que expresa en su oficio, me permito sugerirle que sean solicitados al juez de la causa, esto de conformidad a lo establecido en el inciso 1º del artículo 150 del Código Procesal Penal el cual regula lo siguiente: *“El juez o tribunal ordenará al secretario la expedición de copias, informes o certificaciones cuando sean solicitadas por una autoridad pública o por particulares que acrediten legítimo interés en obtenerlos, siempre que el estado del procedimiento no lo impida, afecte la presunción de inocencia o su normal sustanciación.”* Esto en virtud de lo establecido en el ya antes relacionado artículo 110 literal “f” de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterar mis muestras de estima y consideración.

**DIOS UNION LIBERTAD**

